

—M. Auza.—Ignacio M. Altamirano.—
L. Velazquez.—M. Zavala.—Enrique
Landa, secretario.

Es copia. México, Julio 21 de 1871.—
Gomez Eguarte, Oficial segundo.

COMPETENCIA

*Suscitada por el Juez 2º de Distrito,
al 1º de lo Civil de esta Capital, pa-
ra conocer del juicio hipotecario en-
tablado por la casa Martin Darán y
Cª contra Dª Elisa Tomásí.*

*Pedimento del C. Fiscal de la
Suprema Corte.*

El Fiscal interino dice: que en los autos sobre competencia que la Sala tiene á la vista, pretenden tenerla para conocer del juicio hipotecario promovido por los Sres. Martin Darán y Cª, contra la Sra. Elisa Tomásí, el Juez 2º de Distrito de la Capital y el 1º de lo Civil, ante el que está radicada la respectiva demanda.

La expresada Sra. Tomásí, dueña de las casas núms. 1 y 2 del Puente de Amaya, que forman la finca llamada "Meson de S. Juan Evangelista", consintió en que quedaran hipotecadas especialmente para garantizar el pago de \$220 28 que D. Amilcare Roncarí confesó deber al Supremo Gobierno, como parte del precio en que compró á este las haciendas de la Estanzuela y anexas, ubicadas en el Estado de Michoacan.

La escritura en que se hizo constar este crédito y la hipoteca constituida en garantía, fué de 13 de Enero de 1870. En ella se obligó el deudor á tener en calidad de depósito irregular la expresada cantidad, por el término de nueve años, y con causa de réditos á razon de un cinco por ciento anual, que pagará por tercios de años vencidos, comenzados á contar desde el 18 de

Diciembre de 1869, y con calidad de que por la falta de pago de dos tercios, se tendría por vencido el plazo de la imposición, cualquiera que fuese el que faltase para el vencimiento de la escritura.

Este crédito fué cedido por el Supremo Gobierno, por escritura de 12 de Abril del año pasado de 1873, á los Sres. Martin Darán y Cª, quienes por escrito de 21 del propio mes y año se presentaron ante el Juez 3º de lo civil demandando en juicio hipotecario á la Sra. Tomásí por el pago del capital, en razon de que habiéndose dejado de pagar dos tercios de réditos vencidos el día 18 del citado mes, debía darse por vencido el plazo de la obligacion, de conformidad con las estipulaciones convenidas en la escritura de 13 de Enero de 1870.

Declarada la procedencia del juicio hipotecario y fijada la cédula respectiva, la Sra. Tomásí se presentó por escrito de 2 de Mayo de 1873, oponiéndose á la demanda hipotecaria, con las excepciones siguientes: falta de personalidad en el actor, nulidad del título hipotecario, improcedencia del juicio iniciado.

Después de lo que va referido, bastará decir, que diversos incidentes dieron materia á las actuaciones judiciales, hasta que por auto de 21 de Mayo de 1874, se ordenó entre otras cosas, que se hiciera publicacion de probanzas, y que se entregaran los autos á las partes por cinco dias, para alegar de bien probado, de conformidad con lo prevenido en el art. 991 del Código de procedimientos.

Notificado este auto á los Sres. Martin Darán y Cª, se presentaron por escrito de 29 del mismo mes de Mayo, manifestando, que habiéndose opuesto entre otras excepciones á la demanda, la de *ilegitimidad de la hipoteca*, pedian que el Juzgado mandara hacer saber la existencia de estos autos y el estado en que se hallan, al C. Tesorero general de la Nacion y al Ministerio de Hacienda, á fin de que surta los efectos de *formal denuncia de eviccion* en este negocio.

El Juzgado ordenó de conformidad, que se librasen los oficios solicitados, surtiendo los efectos legales que en el caso tengan lugar, (auto de 2 de Junio de 1874).

A consecuencia de esto, el Promotor fiscal del Juzgado 2º de Distrito, pidió á este Juzgado, en escrito de 22 de Junio del mismo año, que iniciara competencia al 1º de lo civil, pidiéndole su inhibicion en el conocimiento de los autos promovidos por los Sres. Martín Darán y Cª contra la Sra. Elisa Tomásí.

Aceptada la competencia por el Juzgado 1º de lo civil, y sustanciada debidamente, está en estado de que esa Sala la resuelva, como crea que proceda en justicia.

El Juzgado 2º de Distrito, funda la competencia de su jurisdiccion en las razones siguientes:

1ª habiéndose alegado por la Sra. Tomásí como excepcion contra el juicio hipotecario promovido, la nulidad de la hipoteca constituida, y denunciado el juicio al Gobierno, *es de interes del fisco sostener la legalidad de la imposicion, por haberse denunciado al Supremo Gobierno por la causa Darán y Cª, cesionaria de los derechos del fisco, en ese capital, que como obligado á la eviccion y saneamiento, le incumbe salir á la defensa.*

2ª Por el interes que tiene el fisco en que se declare la validéz ó legitimidad de la imposicion, la Union es parte en el juicio en que debe hacerse aquella declaracion.

3ª Conforme al art. 97 de la Constitucion, corresponde á los Tribunales de la Federacion, conocer de las controversias en que la federacion fuere parte.

4ª El fuero de la federacion es atractivo: en consecuencia, los Tribunales federales deben avocarse el conocimiento de aquellos negocios en que teniendo interes el fisco, haya de litigar como actor ó como reo.

Por su parte, el Juzgado 1º de lo civil, sostiene la competencia de su jurisdiccion, con los siguientes fundamentos:

1º El Fisco federal no es parte ni tiene

interes legítimo en un negocio privado que versa únicamente entre particulares, Martín Darán y Cª y la Sra. Tomásí.

2º La circunstancia de tratarse en ese negocio privado de un capital desamortizado que fué de la Nacion, no constituye parte al fisco, pues de otro modo, en todos los casos en que dos ó mas particulares litigan sobre bienes que fueron nacionalizados, el fisco federal será parte, y los Tribunales de la federacion los únicos competentes para conocer de esa clase de negocios.

3º No es cierto que en el juicio hipotecario se haya ó nó puesto por la Sra. Tomásí la excepcion de "*ilegitimidad de la hipoteca constituida*" sino la de "*nulidad del título hipotecario*." Estas excepciones son esencialmente diversas, y si bien la primera podría tener alguna relacion con el interés del fisco, la segunda, que es la alegada, no la tiene, y afecta únicamente los intereses de la parte á quien se opone.

4º Aun suponiendo que la excepcion alegada fuera la de *nulidad de la hipoteca*, no se afectarán con esto los derechos fiscales, supuesto que el fisco con arreglo al art. 24 del decreto de 6 de Febrero de 1861, solo está obligado en el caso de que no se declare válido judicialmente el título de una adjudicacion, á devolver las especies ó valores que hubiese recibido por ella. Esta única obligacion es la que consigna la suprema Orden de 9 de Agosto de 1869, entre otros casos, para el de que se invalide una cesion hecha por el Gobierno, porque judicialmente y en la forma debida se declare que la cesion es inválida *por no existir el capital cedido*.

5º El Tesorero General de la Nacion al otorgar la escritura de cesion á los Señores Martín Darán y Cª, no pudo obligar al Gobierno á la eviccion y saneamiento, en los términos que previene el art. 1740 del Código civil del Distrito Federal y de la Baja California. Esta cláusula de obligacion fué consignada en la referida escritura arbitrariamente por el Notario, pues ni se le

dió esa instrucción entre las que contiene el oficio de la Tesorería General, en cuya virtud procedió á otorgar aquel instrumento, ni el fisco está obligado á la evicción y sanco en sus contratos, no solo conforme á las disposiciones citadas sobre bienes desamortizados, sino con arreglo á la legislación común, que es la que debe aplicarse en los contratos que celebre el Gobierno, y no la especial del Distrito y Baja California consignada en el Código civil, vigente solo en estas localidades.

6º Aun en el caso de estar obligado el fisco á la evicción y sanco, en los términos que expresa el art. 1740 del Código civil, con arreglo á este mismo Código, no habrá en el caso tal obligación, si la cuestión promovida por la excepción alegada es tal que sea necesaria prueba, pues en ese caso, la denuncia del pleito para el efecto de surtir la obligación de la evicción y sanco, debió haberse hecho antes de recibir á prueba el negocio, y en el caso se hizo después de hecha la publicación de probanzas (art. 1610 del Código civil.)

Tales son los fundamentos que ambos Jueces competidores alegan en favor de su jurisdicción.

Desde luego parece evidente, que si en el juicio promovido por los Señores Martín Darán y Compañía, se llega á declarar que la cesión hecha en su favor por el Supremo Gobierno, *es inválida por no existir el capital cedido*, se afectarán los intereses del fisco de la federación, obligado á restituir las especies ó valores recibidos por el capital enagenado. En ese caso, si el fisco tiene alguna razón legal para resistir el cumplimiento de semejante obligación, los Tribunales Federales serán los únicos competentes para conocer del debate judicial que provoque la resistencia de aquel. Entonces la Federación será parte en esa controversia que versará entre el cesionario y el Fisco; pero actualmente se trata de una cuestión jurídica enteramente privada, que versa entre el cesionario y el deudor: el fisco no es

parte en ella, y falta por lo mismo todo fundamento á la competencia exclusiva de los Tribunales Federales.

Si como dice el Promotor Fiscal, á cuya instancia se provocó esta controversia jurisdiccional, la excepción alegada por la Señora Tomásí fuera *la de nulidad de la hipoteca constituida*, se afectarían los intereses fiscales, porque en este caso el crédito cedido, despojado de la garantía que le dá la hipoteca, quedaría con el único carácter de obligación personal, á cargo de D. Amilcare Roncari, que se confesó deudor de la cantidad que importa, por parte ó resto del precio de fincas que compró al Supremo Gobierno. En el supuesto de esa resolución judicial que declarara *la nulidad de hipoteca constituida*, será además eficaz la acción hipotecaria contra la finca vendida, pues debe tenerse presente que, habiéndose hecho la enagenación en 13 de Enero de 1870, además de la hipoteca expresa que se consignó en garantía del precio, hay la hipoteca legal y tácita sobre la finca enagenada, conforme á la legislación vigente en aquella época, sin que pueda oponerse contra la eficacia de esa hipoteca legal, en favor del fisco, el no haberse convertido en expresa, con arreglo á las prevenciones que contienen los artículos 11 y 12 de la ley transitoria que se publicó con el Código de Procedimientos en 13 de Agosto de 1872. Esta ley, lo mismo que el Código á que se refiere, son especiales para el Distrito Federal y territorio de la Baja California, y por lo mismo, inaplicables á la Federación, cuyos derechos no pueden alterarse, ni modificarse por las legislaciones de los Estados.

Así, pues, en el caso que he supuesto, el crédito cedido conservará su carácter de obligación personal á cargo de Roncari, y tendría además, como subsidiaria, la hipoteca legal sobre la finca vendida, cualquiera que sea su actual poseedor; pero es evidente, que habiéndose cedido el crédito con la garantía hipotecaria de las fincas de la Sra. Tomásí, y resultando nula esta garantía, queda mo-

defienda la naturaleza del crédito, acaso en perjuicio del cesionario, quien podría pretender la indemnización correspondiente. Dando por supuesto la eficacia de este derecho, parece claro que el fisco no tiene interés, no es parte en el negocio, sino cuando se deduzca aquel.

Por ahora y por solo la posibilidad de que resulte á cargo del fisco la responsabilidad que acabo de indicar, no puede establecerse que la Federación sea parte, ni que sus Tribunales sean constitucionalmente competentes para dirimir la cuestión que se ventila entre los Señores Martín Darán y Compañía y la Sra. Tomásí.

Pero es necesario repetirlo: la escepcion alegada es la de nulidad del título hipotecario; esta excepcion no importa ni entraña la nulidad del crédito cedido, único caso en que procedería la obligación del Fisco, no para responder de la evicción y saneo, sino para hacer la devolución que ordena el artículo 24 del decreto de 5 de Febrero de 1861.

Por las razones espuestas, el Fiscal concluye pidiendo á la Sala, que se sirva declarar: que el Juzgado 1º de lo Civil es competente para conocer del juicio promovido por los Señores Martín Darán y Compañía contra la Señora Elisa Tomásí, ordenando que se agreguen cancelados los sellos que correspondan al papel comun de que se ha hecho uso en este pedimento.

México, Marzo 4 de 1874.—Lozano.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 26 de 1875.

Vistos los autos sobre competencia suscitada por el Juzgado 2º de Distrito de esta Capital al 1º de lo civil de la misma, para conocer del juicio hipotecario entablado por la casa de Martín Darán y Compañía contra Dª Elisa Tomásí, y cuyo juicio versa sobre reconocimiento del capital de

22.028 pesos, que el Supremo Gobierno, en virtud de las leyes de desamortización vendió á la expresada casa Darán y Cª, y reconocía D. Amilcar Roncari en las casas números 1 y 2 situadas en la calle del Puente de Amaya en esta Ciudad y conocidas con el nombre de "Meson de San Juan Evangelista;" vistos los informes de los Jueces que compiten: lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. fiscal. Oído lo alegado al tiempo de la vista por el Lic. M. Morquecho como patrono de los Señores Martín Darán y Cª, en favor de la jurisdicción del Juez de Distrito, y lo alegado por el Lic. L. Mendez como patrono de Dª Elisa Tomásí por la del Juez 1º de lo Civil, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino:

Considerando: que la demanda entablada por la casa Darán y Cª contra Roncari, ó su viuda la Sra. Tomásí, tiene por objeto un asunto de interés puramente privado, y sin que por ahora afecte los de la Hacienda Pública; único caso en que con arreglo á las leyes y especialmente á la frac. 3ª art. 97 de la Constitución General, son competentes los Tribunales de la Federación para conocer y fallar. Que aun suponiendo que el fisco fuera responsable del capital vendido á Darán y Cª, llegado el caso y en procedimiento distinto solo sería deudor de las especies ó valores que hubiera recibido del comprador, segun lo previene el art. 24 del decreto de 5 de Febrero de 1861. Que tampoco puede alegarse como circunstancia que determine que del pleito hicieron los Señores Martín Darán y Cª, tanto porque esta denuncia por si sola no puede constituir como interesado al fisco, porque fué hecha fuera de tiempo, supuesto que se hizo saber al Ejecutivo de la Union despues de la publicación de probanzas, siendo así que antes de estas debió haberse hecho la denuncia, en virtud de que en el juicio mencionado se rindieron pruebas. Que el decreto de 28 de Agosto de 1862 ha precisado con bastante claridad, cuales

son en materia de litigios motivados por operaciones de nacionalización, las cuestiones sostenidas incradamente con el fisco; en cuya clasificación no puede incluirse el litigio que es objeto de esta competencia. Por ésto y de conformidad con lo pedido por el C. Fiscal, se decreta:

Que el Juez 1º de lo Civil de esa Capital, es el competente para seguir conociendo del juicio hipotecario que la casa Martín Darán y Cª ha promovido ante el expresado Juez, referente á un capital que reconocía D. Amador Roncari, en su finca nombrada "Mesón de San Juan Evangelista" situada en esta Capital.

Devuélvase las actuaciones al Juez 1º de lo Civil de esta capital, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Remítase copia igual al 2º de Distrito para su conocimiento. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Aza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico: México, Junio 14 de 1875.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Sandoval y Bille, contra el cobro de derechos de introducción de 250 fanegas maíz, procedentes de Mazatlan, que les hace el C. Administrador de Rentas de Guaymas.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito:

El fiscal dice: Que en otros juicios de igual naturaleza, ya ha dado su dictámen y

en este no hará mas que repetir lo que en aquellos há dicho. Es tan explícita la ley general de 1º de Mayo de 1868, y tan evidente su oposición con la del Estado de 4 de Diciembre del año próximo pasado, que no es mas que tener á la vista ambas disposiciones para acceder á lo que solicitan los quejosos, Sres. Sandoval y Bille. Aquella suprema ley prohíbe á los Estados imponer mayores gravámenes á su importación, que los suyos propios á su exportación; y ésta, la del Estado, no solo impone mayores contribuciones á los efectos nacionales venidos de otro Estado, sino los exime de ellos, al mandarlos á otro de la Federación, y por lo mismo, los procedimientos del C. Administrador de Rentas de esta Ciudad apoyado en la ley anticonstitucional de clasificación de rentas, viola las garantías á los quejosos, en cuanto á sus intereses, que les concede la Carta Fundamental en sus artículos 4º y 16; en consecuencia, el modo de desagraviarlos es, el que se decreta el amparo que han solicitado, estando fundado este, en las disposiciones legales que se han citado y comprendido en las fracciones 1ª y 3ª de la ley de 20 de Enero de 1869.

Guaymas, Junio 1º de 1874.—*Lic. José Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Junio 15 de 1874.—*Lic. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Junio 13 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por los Señores Sandoval y Bille, contra el cobro que les hace el ciudadano Administrador de Rentas de este Puerto, por derechos de introducción de doscientas cincuenta fanegas de maíz, que recibieron en el Pailebot «Josefina Victoria» el 15 de Mayo próximo pasado; visto el informe justificativo de la autoridad responsable, y pedido del Promotor Fiscal; visto cuanto mas consta y ver convino, y

Considerando: que las disposiciones contrarias de las leyes de clasificación de